
población y desarrollo

Envejecimiento y desarrollo en América Latina y el Caribe

José Miguel Guzmán



NACIONES UNIDAS



Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía
(CELADE) – División de Población

Santiago de Chile, junio de 2002

Este documento fue preparado por José Miguel Guzmán, Punto Focal del Envejecimiento de la CEPAL, para su presentación en el Encuentro Preparatorio Iberoamericano para la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, Santa Cruz, Bolivia, 19-21 de noviembre de 2001. Su elaboración se inscribe en el marco del proyecto regional de colaboración entre el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL. El autor agradece la colaboración de Ralph Hakkert, Asesor del Equipo de Apoyo Técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y de Zulma Sosa, consultora del CELADE..

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización.

Publicación de las Naciones Unidas

LC/L.1737-P

ISBN: 92-1-322028-6

ISSN: 1680-8991

Copyright © Naciones Unidas, junio de 2002. Todos los derechos reservados

N° de venta: S.02.II.G.49

Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N. Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

Índice

Resumen	5
Introducción	7
I. El proceso de envejecimiento demográfico en América Latina y el Caribe	9
II. Los adultos mayores en el actual contexto de pobreza, inequidad y baja cobertura de los sistemas de seguridad social	13
II.1 Pobreza e inequidad en adultos mayores.....	13
II.2 Marco conceptual	14
III. Transferencias hacia los adultos mayores de los sistemas de seguridad social	17
III.1 Sistemas de pensiones	17
III.2 Procesos de reformas del sistema de pensiones.....	19
III.3 Reformas de la salud	21
IV. Recursos provenientes del mercado: actividad económica del adulto mayor	23
V. La familia como estructura de apoyo a los adultos mayores	27
V.1 Determinantes de la coresidencia de los adultos mayores	28
V.2 Redes de apoyo social y comunitario	31
VI. Discusión	33

Bibliografía	37
Anexo estadístico	41
Serie Población y Desarrollo: Números publicados	49

Índice de cuadros

Cuadro 1	Países seleccionados de América Latina y el Caribe: Proporción y tasas de crecimiento de la población de 60 años y más, 2000-2050	10
Cuadro 2	Países seleccionados de América Latina: población total de 60 años y más en el año 2000 e incrementos poblacionales en los períodos 2000-2025 y 2025-2050	11
Cuadro 3	Porcentaje de beneficiarios de pensiones y jubilaciones entre la población de 60 años y más en América Latina, POR educación y zona de residencia, CIRCA 1997	19
Cuadro 4	Regresión logística e la proporción de personas que viven solas o sólo con su pareja	28

Índice de gráficos

Gráfico 1	Distribución de la población de 60 años y más según tipo de ingreso	14
Gráfico 2	Cobertura previsional en la población femenina de 60 años y más, según condición de pobreza. América Latina, área urbana, alrededor de 1997.....	18
Gráfico 3	Cobertura previsional en la población masculina de 60 años y más, según condición de pobreza. América Latina, área urbana, alrededor de 1997.....	18
Gráfico 4	Incidencia de la discapacidad en la población de 60 años y más según grupos de edades y sexo. México, censo 2000	24
Gráfico 5	Cobertura de las pensiones y jubilaciones y tasa de participación en la actividad económica. población masculina de 60 años y más en países seleccionados de América Latina. áreas urbanas, 1997	25
Gráfico 6	Incidencia de los ingresos por trabajo en la pobreza de los hogares con adultos mayores. área urbana, 1997	26

Resumen

Se analiza el proceso de envejecimiento demográfico que están experimentando los países de América Latina y el Caribe y su relación con aspectos del desarrollo. Se trata de un proceso generalizado, ya que en todos los países de la región la población de 60 años y más muestra un incremento sustancial. Además, el envejecimiento se produce con mayor rapidez de lo que fue históricamente en los países desarrollados. Sin embargo, lo más preocupante es el contexto social y económico de la región, caracterizado por una alta incidencia de la pobreza, una persistente y aguda inequidad social, una baja cobertura de la seguridad social y una probable tendencia hacia el deterioro de las redes de apoyo familiar.

Para el análisis, se considera que la calidad de la vida de los adultos mayores está relacionada con su acceso a los recursos monetarios y no monetarios (ingresos, bienes y servicios) que les permitan vivir un envejecimiento sano y activo. Se analizan tres componentes: seguridad social, trabajo y apoyo familiar y en cada uno de ellos se analiza además el impacto de estos recursos en las familias y el conjunto de la sociedad, especialmente su impacto en la disminución de la pobreza y la desigualdad.

Se concluye que para enfrentar el reto del envejecimiento es necesario emprender acciones concertadas y a mediano y largo plazo, y hacerlo a la brevedad, aprovechando la ventana de oportunidades que brinda la dinámica demográfica actual en la mayoría de los países de la región.

Introducción

“One policy challenge is to recast aging population as a natural resource rather than a societal drain, and to exploit opportunities to use these growing reservoirs of human capital”

(Commission on Behavioral and Social Sciences and Education, 2001)

Es sabido que en el futuro próximo la mayoría de los países de América Latina y el Caribe deberá enfrentar las demandas de una creciente población adulta mayor. Aunque hay diferencias importantes entre países y dentro de estos (en varios países este proceso se inició décadas antes), la proporción y el número absoluto de personas de 60 años y más se incrementarán sostenidamente en los próximos decenios en todos los países de la región (véase la tabla A.1 del anexo) Entre los años 2000 y 2025, 57 millones de adultos mayores se sumarán a los 41 millones existentes y entre 2025 y 2050 ese incremento será de 86 millones de personas. En términos de la rapidez de este cambio, la tasa de crecimiento entre los años 2020 y 2025 será de 3.5%, es decir, el cambio se producirá tres veces más rápidamente que en la población total.

Existe un consenso en cuanto a que la posibilidad de enfrentar los problemas de un número creciente de personas mayores depende tanto de la capacidad del Estado para generar y aplicar políticas públicas de gran cobertura –especialmente en las áreas de seguridad social, salud y otras políticas de asistencia social– como de los patrones de organización familiar y otros tipos de apoyo comunitario.

Sin dudas, la forma y características que asuma la nueva generación de políticas públicas que se desarrollan en muchos países de la región en la última década –por ejemplo, aquellas relativas a las reformas en la seguridad social, en la que en muchos casos se otorga un rol importante al sector privado– definirán la medida en que los países podrán absorber las consecuencias demográficas del futuro proceso de envejecimiento.

El objetivo de este documento es analizar este proceso en su relación con algunos aspectos del desarrollo, para cuyo efecto se consideran tres componentes que definen en gran medida los recursos con que cuentan los adultos mayores para su sobrevivencia: **seguridad social, trabajo y apoyo familiar**. En cada uno de estos aspectos se analiza el impacto de estos recursos en las familias y en el conjunto de la sociedad, especialmente el que ejerce en la disminución de la pobreza y la desigualdad. Este documento se basa parcialmente en dos trabajos recientes conjuntos del autor y Ralph Hakkert (Hakkert y Guzmán 2000; Guzmán y Hakkert, 2001).

I. El proceso de envejecimiento demográfico en América Latina y el Caribe

Son al menos tres, los hechos de importancia que caracterizan el proceso de envejecimiento actual de la estructura demográfica en América Latina y el Caribe y también sus tendencias para el futuro. **En primer lugar**, se trata de un proceso generalizado. En todos los países de la región, la población de 60 años y más muestra un incremento sustancial, tanto en términos absolutos como relativos (véase el cuadro 1 y la tabla A.1 del Anexo).

La proporción de población de 60 años y más aumentará desde un 8% en el año 2000 a 14.1% en 2025 y a 22.6% en 2050. Cabe destacar que este porcentaje será más alto en las mujeres que en los hombres, particularmente en el área urbana, puesto que para el 2025, el 15.4% de las mujeres de la región tendrán 60 años o más, contra 12.6% de los hombres, y la diferencia en el área urbana (15.8% contra 12.5%) será mayor que en el área rural (13.6% contra 12.9%) (CELADE, 1999).

La variación entre los países tiene relación directa con la etapa actual de transición demográfica de cada país; así, la proporción de personas de 60 años y más es menos del 5% en los países en situación inicial o intermedia frente a un 9.1% en aquellos países en una etapa más avanzada de este proceso.

PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PROPORCIÓN Y TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS, 2000-2050

País	Población de 60 y más años de edad (%)			Tasa de crecimiento	
	2000	2025	2050	2020-2025	2025-2050
Uruguay	17.2	19.6	24.5	1.2	1.3
Argentina	13.3	16.6	23.4	1.9	1.9
Cuba	13.7	25.0	33.3	2.6	0.9
Barbados	13.4	25.2	35.4	2.8	1.0
Chile	10.2	18.2	23.5	3.3	1.5
Brasil	7.9	15.4	24.1	3.7	2.3
México	6.9	13.5	24.4	3.8	2.8
Rep. Dominicana	6.5	13.3	22.6	3.9	2.8
Bolivia	6.2	8.9	16.4	3.3	3.4
Paraguay	5.3	9.4	16.0	4.4	3.3
Honduras	5.2	8.6	17.4	4.0	3.9
Total América Latina y el Caribe	8.0	14.1	22.6	3.5	2.5

Fuente: tabla A.1 del anexo.

El envejecimiento demográfico está más avanzado en Uruguay, Argentina, Cuba y Chile y en países del Caribe (Trinidad y Tabago y Barbados), donde más de un 10% de la población es mayor de 60 años. En el otro extremo se ubican países que se encuentran menos adelantados en su transición demográfica (Guatemala, Bolivia, Paraguay, Honduras, Haití, entre otros), donde un porcentaje inferior al 6.5% de la población sobrepasa los 60 años.

Hay un grupo de países en situación intermedia –con una transición demográfica bastante avanzada– que experimentarán los mayores aumentos de sus mayores de 60 años en las próximas décadas. Entre estos se encuentran Brasil, México, Colombia, Costa Rica y Panamá¹. Otro indicador de la estructura demográfica por edad, el *índice de envejecimiento demográfico* (cociente entre los mayores de 60 años y los menores de 15 años), muestra el mismo patrón de cambio y llega a 15 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años en países menos avanzados en su transición demográfica contra 50 en los más avanzados. Las cifras del cuadro 2 muestran que los mayores incrementos relativos se darán en países que actualmente no registran los mayores porcentajes de personas mayores de 60 años, como Brasil, México y República Dominicana e incluso en Honduras y Paraguay, ese grupo crecerá a tasas superiores a 4% entre 2000 y 2025. Para 2025 –y especialmente para 2050– se observan proporciones de adultos mayores que superan 15% en todos los países y 30% en varios de ellos.

El envejecimiento demográfico es más notorio si se analizan los cambios en los valores absolutos y esas cifras son las claves para definir políticas públicas (cuadro 2). Por su gran tamaño de población, Brasil y México tendrán los mayores incrementos en las próximas décadas. Colombia, Venezuela, Argentina y Perú también registrarán aumentos sustanciales.

Cuadro 2

¹ El aquí denominado proceso de envejecimiento no puede considerarse como un proceso lineal. Así, Recchini de Lattes (2000) demuestra que Argentina experimentó tres etapas de envejecimiento. Una, de “no-envejecimiento” (1870-1925); una segunda, de “rápido envejecimiento” (1925-1970) y la última, de “disminución de la tendencia”(1970-2005). Para el período 2005-2050 predice una nueva “aceleración” de la tendencia de envejecimiento.

PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN TOTAL DE 60 AÑOS Y MÁS EN EL AÑO 2000 E INCREMENTOS POBLACIONALES EN LOS PERÍODOS 2000-2025 Y 2025-2050

Fuente: tabla A.1 del anexo.

País	Año 2000: población de 60 y más años (millones)	Incremento 2000-2025 (millones)	Incremento 2025-2050 (millones)
Brasil	13.4	20.5	26.2
México	6.8	10.7	18.2
Colombia	2.9	5.1	7.4
Argentina	4.9	2.9	4.9
Venezuela	1.6	3.0	4.4
Perú	1.8	2.6	4.0
Total América Latina y el Caribe	41.3	57.0	86.0

En segundo lugar, el ritmo del envejecimiento en la región es más rápido de lo que fue históricamente en los países desarrollados. Así, en los Estados Unidos, el porcentaje de personas con 65 o más años aumentó de 5.4% en 1930 a 12.8% en el 2000; en Holanda, de 6.0% en 1900 a 13.8% en el 2000, y en Finlandia de 5.3% a 12.9% en el mismo período. Pero en Brasil, la proporción actual de 5.1% llegará a 14.5% en 2040, se trata de un aumento que es 2.1 veces más rápido que en los Estados Unidos y 3.1 veces más rápido que en Holanda. En América Latina y el Caribe como un todo, se espera un cambio similar en la proporción de adultos mayores (de 5.4% en 2000 a 14.0% en el 2040) e incluso que países menos avanzados en su transición demográfica tengan incrementos significativos (Guzmán y Hakkert, 2001).

En tercer lugar, los posibles impactos negativos del envejecimiento no sólo dicen relación con su faceta cuantitativa sino también con el escenario social, económico y cultural en que el proceso está teniendo lugar, caracterizado por alta incidencia de la pobreza, persistente y aguda inequidad social, baja cobertura de la seguridad social² y una probable tendencia hacia el deterioro de las estructuras familiares de apoyo al adulto mayor. Se ha postulado, además, la probabilidad de que las cohortes que se incorporan al grupo de adultos mayores puedan ser en el futuro más frágiles desde el punto de vista de su salud³.

Las estimaciones de pobreza indican que la proporción de población de la región en situación de pobreza llega a 44% y que se acerca o supera 70% en Honduras y Nicaragua (CEPAL, 2000b); además, y si bien la mayoría de los países registró una disminución de la pobreza durante la década de 1990, el nivel actual todavía es superior al de 1980 (Klein y Tokman, 2000); las evidencias indican que en los últimos tres años la crisis económica puede revertir esta tendencia favorable e incluso que la incidencia de la pobreza podría aumentar (CEPAL, 2000) y a ello se agrega la enorme desigualdad de ingresos que caracteriza a la mayoría de los países de la región, que tiene la peor distribución de ingresos del mundo y, más aún, esa situación no ha mejorado ni hay indicaciones de que lo haga a corto plazo (Morley, 2000).

Al contexto económico y social descrito se suman cambios institucionales cuyo impacto no ha sido aún suficientemente analizado y ese es el caso de la reforma de los sistemas de seguridad

² Este fenómeno afecta a todo el desarrollo mundial: “El bajo nivel de fecundidad y el consiguiente envejecimiento de la población están ocurriendo en sociedades contemporáneas a un estado de menor desarrollo económico que las experimentadas históricamente, donde los problemas de envejecimiento y de ayuda a los adultos mayores pobres son enormes (traducción libre)” McNicoll (1997: 50).

³ Palloni (2000) considera que la sobrevivencia de las nuevas cohortes de adultos mayores está más relacionada con los cambios en la tecnología médica que con los del estado nutricional o el mejoramiento de la salud. Entonces, su demanda por servicios de salud será más alta.

social y las leyes laborales, que en la mayoría de los países fueron acompañados del traslado de responsabilidades que antes eran consideradas de bien social desde el Estado al sector privado. En tal contexto, la coresidencia de los adultos mayores con familiares podría convertirse en una de las pocas alternativas que les permitiría asegurar alguna calidad de vida.

En tales condiciones es fácil comprender por qué la mayoría los países de la región ha sido incapaz de crear condiciones propicias para transferir riquezas que aseguren y consoliden el bienestar de los adultos mayores (Palloni, 2000). El principal reto está entonces en la forma en que los países afrontarán el aumento continuo de una población de adultos mayores, cuya calidad de vida no ha sido mejorada significativamente, en momentos en que todavía constituyen una pequeña proporción de la población total. En este contexto de envejecimiento demográfico, de alta incidencia de pobreza y desigualdad y de escaso desarrollo institucional, es dable esperar que los sistemas de organización familiar se mantengan como espacios privilegiados en que los adultos mayores convivan junto a sus familiares, se vean protegidos, dispongan de alimentación adecuada y accedan a una atención de salud y convivencia humana mínimas.

II. Los adultos mayores en el actual contexto de pobreza, inequidad y baja cobertura de los sistemas de seguridad social

II.1 Pobreza e inequidad en adultos mayores

Gran parte de los estudios y políticas sociales se aproxima al tema de la tercera edad desde una óptica que otorga a los adultos mayores la condición de grupo social vulnerable⁴. No obstante, en la mayoría de los países de la región la incidencia de pobreza en los hogares con adultos mayores es menor que la de hogares sin adultos mayores (CEPAL, 2000 b). Datos provenientes de otras fuentes muestran resultados similares (del Popolo, 2000); así, en 11 de 15 países analizados la incidencia de la pobreza en los adultos mayores es más baja que en la población de 15 a 59 años. Es importante señalar que en las áreas urbanas no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres adultos mayores en cuanto a la incidencia de la pobreza. Sin embargo, excluidos Brasil y El Salvador, en las áreas rurales de Bolivia, Honduras, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana y Chile las mujeres están más afectadas por la pobreza que los hombres.

⁴ En cuanto a la mujer adulta mayor, los estudios remarcan su fragilidad en términos de salud y participación en el mercado de trabajo, aunque no todos comparten dicho énfasis (Gibson, 1996; Montes de Oca, 1997). Si bien algunas encuestas, como ENSE de México de 1994 indican que los problemas de la mayoría de las personas de 60 años y más son económicos (39,8%), seguidos por problemas de salud (32,6%) y de la familia (8,3%), ellos no parecen ser el sector más pobre de la población

No es del todo obvia la forma de interpretar estos datos. Así, la menor pobreza de los adultos mayores puede provenir de los recursos acumulados a lo largo de la vida productiva. En Chile, por ejemplo, el 78.5% de los jefes de hogares que tienen 60 años o más años de edad son propietarios de su casa, y la variación según estrato de ingreso es leve; esa cifra contrasta con el 43.4% de los jefes de hogar menores de 60 años (MIDEPLAN, 1999). Es posible que exista un efecto de selectividad, pues antes de llegar a su vejez las personas más pobres están expuestas a una mayor mortalidad.

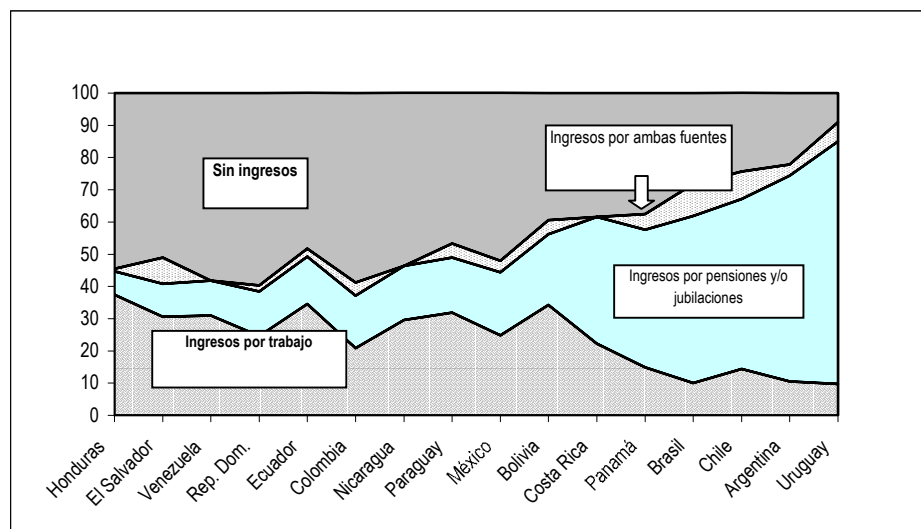
También es posible que los adultos mayores necesitados sean acogidos en la familia del hijo o hija con mejores condiciones económicas; como la pobreza se mide en el plano de los hogares, ellos aparecen con las características del hogar en que residen sin importar que sus recursos propios sean escasos.

II.2 Marco conceptual

En este estudio se considera que la calidad de la vida de los adultos mayores tiene relación con su acceso a recursos monetarios y no monetarios (ingresos, bienes y servicios) suficientes para que vivan su vejez sanos y activos. Su capacidad para manejar recursos monetarios es fundamental, no sólo por las implicaciones en su calidad de vida (acceso a salud, esparcimiento, etc.) sino también porque con ello pueden ayudar a las generaciones más jóvenes, adoptar una posición altruista que dé mayor sentido a sus vidas y ser un importante referente familiar y comunitario.

Los recursos vienen de tres fuentes. Primero, las transferencias sociales (pensiones, seguros de salud, subsidios por discapacidad y transferencias comunitarias). Segundo, el mercado (salarios y remuneración al trabajo, acumulación de capital y sistemas privados de pensiones) y tercero, las transferencias familiares (ayuda monetaria directa, regalos, etc.) o indirecta (apoyo emocional); la coresidencia con parientes es una fuente de transferencia familiar muy importante (Palloni, 2000).

Gráfico 1
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 60 AÑOS Y MÁS
SEGÚN TIPO DE INGRESO



No se cuenta con información que permita una cuantificación simultánea del peso de todos estos componentes en las condiciones de vida de las personas de edad. Sin embargo, algunos estudios muestran la importancia de al menos dos de los principales componentes de ingresos: las **jubilaciones y pensiones** y el **trabajo**. A nivel agregado, el peso de esos componentes varía según el país (gráfico 1) (CEPAL, 2000 b). En un pequeño grupo de países (Argentina, Uruguay, Brasil y Chile), la mayoría de los adultos mayores (entre 60 y 80%) recibe ingresos por pensiones y jubilaciones, y, por tanto, menos de un 15% es económicamente activo. Al otro extremo se sitúan Bolivia, México, Paraguay, Nicaragua, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Venezuela y El Salvador, cuya cobertura de seguridad social varía entre baja y muy baja (entre 8 y 26%) y entre un 20 y un 30% del ingreso proviene de la participación directa en la actividad económica. En estos últimos casos, casi la mitad de la población adulta mayor no recibe ingresos por ninguna de estas dos fuentes y depende de la ayuda familiar y/o de redes de apoyo comunitario; es posible, entonces, que este grupo sea el que registra la mayor vulnerabilidad.

En lo que sigue se analizará cada uno de estos elementos en busca de determinar la medida en que están presentes en los países y cuál es el espacio existente para el diseño de políticas dirigidas a mejorar sus condiciones de vida.

III. Transferencias hacia los adultos mayores de los sistemas de seguridad social

III.1 Sistemas de pensiones

Los sistemas previsionales de la mayoría de la región no permiten a la fuerza laboral acumular recursos para una vejez digna sin depender de un trabajo adicional o de ayuda familiar⁵. La cobertura es mayormente baja y, si el sistema existe, la pensión no siempre basta (cuadro A-2 del anexo). Más de 50% de la población urbana de 60 y más años recibe ingreso por ese concepto, frente a 38% en las zonas rurales⁶, valor que baja a 10% si se excluye Brasil, cuya cobertura en las áreas rurales es elevada por su amplia cobertura de los trabajadores agrícolas. Sólo en Argentina, Brasil, Cuba, Chile y Uruguay la cobertura urbana supera el 50% de la población de 60 años y más. En Colombia, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Venezuela ni siquiera alcanza un 25% (CEPAL, 2000b). En las áreas rurales, excluido Brasil, la situación es peor, pues en la mayoría no llega ni a 10% de los adultos mayores; la cobertura es baja en la mayoría de los países y una gran parte de la población, particularmente pobres⁷, es excluida (gráfico 2).

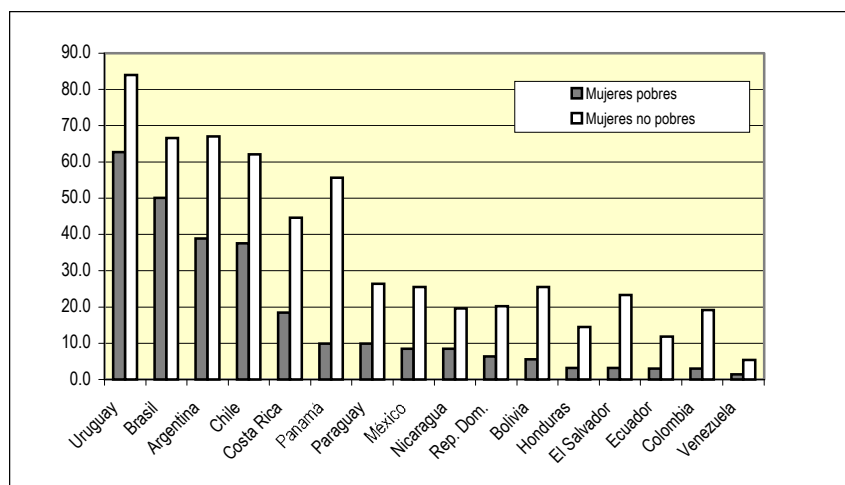
⁵ Cuando se refiere al alivio de la pobreza, Rodríguez (2000) indica que el número de adultos mayores dependientes puede significar demandas similares a las de los hogares con presencia de muchos niños.

⁶ En las zonas urbanas no se incluyen Cuba, Guatemala, Haití y Perú y en las áreas urbanas el cálculo sólo incluye a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Panamá y República Dominicana.

⁷ Benítez Zenteno (2000) puntualiza que en México excluyen generalmente a la población indígena y rural.

Gráfico 2

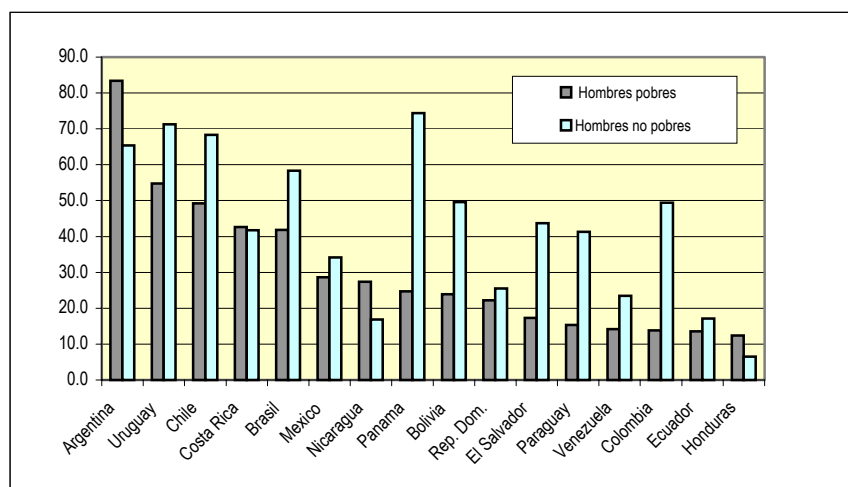
COBERTURA PREVISIONAL EN LA POBLACIÓN FEMENINA DE 60 AÑOS Y MÁS, SEGÚN CONDICIÓN DE POBREZA. AMÉRICA LATINA, ÁREA URBANA. ALREDEDOR DE 1997



Fuente: Cuadro A-5

Gráfico 2 (conclusión)

COBERTURA PREVISIONAL EN LA POBLACIÓN MASCULINA DE 60 AÑOS Y MÁS, SEGÚN CONDICIÓN DE POBREZA. AMÉRICA LATINA, ÁREA URBANA. ALREDEDOR DE 1997



Fuente: Cuadro A-5

Tanto estos datos como los del cuadro 3 evidencian que la exclusión es mayor en los países con baja cobertura, y en estos casos el acceso a una pensión o jubilación constituye un privilegio. Con la excepción de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, donde la cobertura es mayor, los países de la región registran una pronunciada asociación entre cobertura y nivel educativo. Un mayor nivel de educación está asociado a un trabajo más estable que se ubica en el sector formal de la economía; la mayoría de los sistemas de pensiones excluye a los trabajadores del sector informal y a los trabajadores por cuenta propia, especialmente pequeños comerciantes y trabajadores agrícolas. Como la inserción económica de las mujeres se da generalmente por períodos más cortos y en los sectores informales, son más discriminadas que los hombres en ese aspecto; sin embargo, las mujeres casadas pueden beneficiarse de los ingresos que reciba en el hogar por estos conceptos o de la pensión de viudez, si es el caso.

Cuadro 3

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES ENTRE LA POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS EN AMÉRICA LATINA, POR EDUCACIÓN Y ZONA DE RESIDENCIA, CIRCA 1997

Área	Años de estudios aprobados			Total
	0-5	6-9	10 y +	
Urbana ¹	34	41	54	39
Rural ²	20	24	45	21

Fuente: CEPAL, 2000b.

¹Promedio simple de 19 países; ²Promedio simple de 9 países.

Las razones ya expuestas llevan a considerar que el éxito de la nueva generación de reformas –y particularmente las reformas de las pensiones– estará directamente ligado a la capacidad de los sistemas para incorporar contingentes crecientes de trabajadores que trabajan en el sector no formal, que habitualmente son marginados de estos sistemas. El reto es particularmente exigente, por cuanto en la región como un todo el empleo informal, que era de casi 44% del total del empleo en 1990, se incrementó a 48% en 1998 (Klein y Tokman, 2000).

Una mayor cobertura de la seguridad social ejerce un impacto significativo en la disminución de la pobreza y la desigualdad de ingresos, así se comprueba especialmente en los países de mayor cobertura previsional (CEPAL, 2000 b). Ese impacto es más significativo en los hogares en que sólo residen adultos mayores (cuadro A-3 del anexo y gráfico 3); si en este grupo se eliminaran los ingresos provenientes de las pensiones, la pobreza de los mayores de 60 años aumentaría de 26% a 44% en las zonas urbanas y de 34% a 42% en las rurales. El citado estudio de la CEPAL muestra también la presencia de un efecto redistributivo de las pensiones, que crece a medida que se amplía la cobertura previsional. Este efecto se atenuaría o eliminaría en los nuevos procesos de reforma, dada la estrecha relación que en estos sistemas tienen los beneficios y la vida laboral; ello hace que las disparidades que se generan en la vida laboral se transmitan y agraven en la etapa de jubilación. Souza (1998) advierte que la extensión de los beneficios de la seguridad social en Brasil benefició no solamente a los adultos mayores sino que también hizo un aporte significativo al ingreso del hogar en que corresiden.

En un estudio similar, que analiza el total de las transferencias⁸ recibidas –compuestas mayoritariamente por las pensiones– se comprueba que éstas tienden a disminuir la incidencia de la pobreza relativa de 43% a 29% en 7 países estudiados (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, México, Colombia y Costa Rica). Los efectos son más importantes en las personas mayores de 65 años, posiblemente porque las pensiones constituyen el grueso del total de transferencias en estas edades (Uthoff y Ruedi, 2001).

III.2 Procesos de reformas del sistema de pensiones

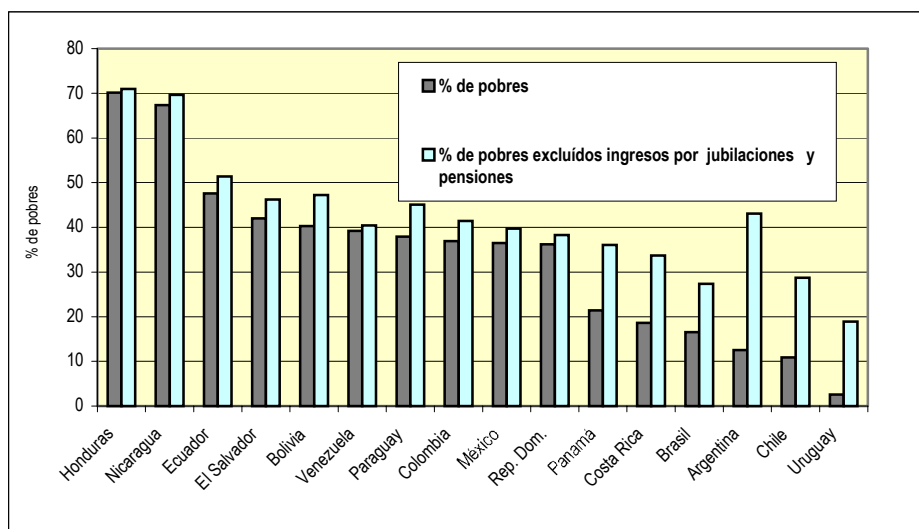
del sector salud y seguridad social, particularmente en este último, tuvieron lugar en un momento en que los antiguos sistemas mostraban deficiencias administrativas y financieras (Bravo, 2000). Se estima que a finales de la década de 1980 el déficit de la seguridad social fluctuaba entre el 5 y el 17% del PIB en Argentina, Cuba, Chile y Uruguay y el subsidio fiscal al sistema –como porcentaje del total del gasto– variaba entre 35% y 63% (Mesa Lago, 2000). Durante los años noventa, siete países de América Latina reformaron sus sistemas de pensiones e introdujeron

⁸ Las transferencias incluyen: pensiones y jubilaciones, seguros de desempleo, indemnizaciones por despido, becas de estudio, cuotas de alimentos, aportes de personas que no viven en el hogar, donaciones, intereses, dividendos y ayudas en dinero, subsidios, etc.

sistemas de capitalización individual, basados total o parcialmente en el modelo chileno (Ayala, 1995; Lora y Pagés, 2000)⁹. En la mayoría de estos casos coexisten, al menos temporalmente, un sistema de beneficios administrados por el sector público y otro de capitalización individual, en el que predomina la administración privada. No obstante, todavía no termina la oleada de reformas, pues forman parte de una serie de reformas estructurales y de políticas de alcance muy amplio, emprendidas en casi todos los países de la región. Las reformas de los sistemas de pensiones condujeron, además, a reformas de fondo de la seguridad social en salud, las que también involucran compañías aseguradoras y prestadores de servicios privados.

Los nuevos modelos resultantes en los ocho países que al año 2000 introdujeron las reformas no fueron iguales (CEPAL, 2000a). Un primer modelo, llamado *sustitutivo*, implantado en Chile (1981), Bolivia (1997), México (1997) y El Salvador (1998), elimina el antiguo sistema de reparto y lo reemplaza por uno de capitalización plena e individual (CPI). En un segundo modelo, llamado *paralelo*, implantado en Perú (1993) y Colombia (1994), no se elimina el sistema de reparto sino que compite con el de capitalización individual. Finalmente está el modelo *mixto*, que reforma el sistema público y lo integra al de capitalización individual; es el caso de Argentina (1994) y Uruguay (1996). La elección del modelo tiene más relación con las particularidades de cada país que con el *momentum* del proceso de envejecimiento. De hecho, y así lo menciona Bravo (2000), no existe una norma que justifique la necesidad de un tipo particular de reforma que considere sólo las tendencias demográficas.

Gráfico 3
INCIDENCIA DE LOS INGRESOS POR JUBILACIONES Y PENSIONES EN LA POBREZA DE LOS HOGARES CON ADULTOS MAYORES. AREA URBANA, 1997



Fuente: Cuadro A-3 Anexo.

Existen severas dudas sobre la capacidad de los sistemas para crear condiciones óptimas para la vejez de las personas. A pesar de la limitada experiencia, se aprecian algunos hechos preocupantes en la evolución de los sistemas de seguridad social luego de las reformas (CEPAL, 2000a): 1) el no aumento de la cobertura, 2) el continuo rol subsidiario del Estado, 3) los altos costos fiscales de la transición, 4) los onerosos costos de administración y, 5) el aumento de la brecha entre las expectativas sobre el monto de la pensión y lo realmente recibido. A lo anterior

⁹ Con la reforma de 1981, Chile estableció un sistema privado de administración de las pensiones basado totalmente en la capitalización individual. Posteriormente, Perú (1993), Colombia (1994), Argentina (1994), Uruguay (1996), México (1997), Bolivia (1997) y El Salvador (1998) adoptaron sistemas parcialmente inspirados en la reforma chilena.

puede agregarse la falta de evidencias que permitan pensar que las reformas de los sistemas de pensiones disminuirán las desigualdades actuales.

En este sentido, diversas evaluaciones del sistema chileno han llevado a que algunos autores concluyan que los nuevos sistemas no necesariamente mejoran la cobertura, los beneficios ni la eficiencia de las prestaciones (Nitsch y Schwarzer, 1998; Saad, 2000); así, los pobres siguen dependiendo en forma desproporcionada del apoyo familiar o de su inserción en la actividad económica.

Se sostiene que en América Latina la ausencia de la dimensión de género en el desarrollo de los sistemas privados es dramática¹⁰; de hecho, hay un debate sobre la forma de incluir la equidad de género en las reformas de la seguridad social, tomando en cuenta el impacto diferencial del envejecimiento en los hombres y las mujeres, y particularmente la predominancia de las mujeres entre los adultos mayores (Bravo, 2000). La mayor esperanza de vida de las mujeres, su trabajo más corto y menos remunerado (a causa, entre otros factores, del papel reproductivo y doméstico atribuido a ellas y a la segmentación del mercado de trabajo según género) son factores que provocan condiciones desfavorables para las mujeres, y ello se agrava cuando, como en el caso de Chile, el monto de las pensiones es diferencial por sexo (Arenas de Mesa, 1999). Otra característica del sistema es su impacto negativo en las pensiones femeninas¹¹ (Arenas de Mesa, 1999)¹². Pero el tema de género en la seguridad social va más allá de la equidad. El paso de un sistema público a otro privado ejerce su efecto en las finanzas públicas, las que por un período relativamente prolongado deben compensar a las personas cuya pensión queda debajo del mínimo. En el caso de Chile, dos tercios de los recursos públicos destinados a este propósito serán destinados a las mujeres, y esa cifra aumentará hasta en un 80% en el año 2037 (Arenas de Mesa, 1999).

III.3 Reformas de la salud

Las reformas a los sistemas de pensiones condujeron también a profundas modificaciones en la seguridad social en salud, y ellas involucran a las compañías aseguradoras y a los prestadores de servicios privados; además, indujeron cambios en la protección contra el riesgo profesional. En los países más avanzados en este proceso, se instituyeron pensiones asistenciales y servicios subsidiados de salud para extender la seguridad social a los pobres y se amplió la cobertura. Los modelos son básicamente de tres tipos y combinan la solidaridad del seguro público de salud con esquemas privados de seguridad (CEPAL, 2000 a).

El primer modelo, llamado *dual*, rige en Chile desde 1981 (y se aplicó más tarde en Perú), y son los mecanismos del mercado los que determinan reglas de protección similares a las del mercado de seguros. En estos modelos no existe solidaridad entre los participantes –a diferencia del sistema público en que sí existe– y el sistema es altamente selectivo. Además, la falta de recursos

¹⁰ En la Octava Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe, con motivo de la reunión preparatoria del seguimiento de la Conferencia de Beijing (Beijing+5), se alcanzó el Consenso de Lima, que incluye la recomendación "... promover el reconocimiento de la contribución social y económica del trabajo no remunerado de mujeres, predominantemente dentro del hogar, y sugiere a los gobiernos incluir a las mujeres que realizan este tipo de trabajo dentro de los Sistemas de Seguridad Social".

¹¹ Es el caso de Chile, que bajo el sistema público y asumiendo iguales retornos e igual número de años de contribución, las pensiones serían iguales para hombres y mujeres. Bajo la misma presunción, las pensiones de mujeres en el sistema privado variarían entre 52 y 76% de las pensiones de los hombres, dependiendo de la edad en la cual comenzaron las contribuciones (Arenas de Mesa, 1999).

¹² El autor considera los siguientes factores negativos de los sistemas privados para las mujeres: una tarifa actuarial diferente por sexo (diferentes esperanzas de vida), diversas edades de retiro, la consideración del 100% de vida activa en el cómputo de las pensiones y, d) los efectos de la comisión fija (que tienden a ser substanciales si el tiempo de contribución al sistema es relativamente corto). Otros autores consideran que el sistema tiene por lo menos tres ventajas para las mujeres (Cox Edwards, 2001). Primero, las pensiones propias y las pensiones de sobrevivientes son complementarias. Segundo, en el nuevo sistema se requiere que los hombres casados contribuyan con una anualidad común dentro de la familia que lleva a una distribución a favor de las mujeres. Tercero, no hay un número mínimo de años de contribución para recibir una pensión.

colectivos lleva a muy altos costos para la población con riesgo elevado, y ese es el caso de los adultos mayores, que terminan siendo atendidos por el sistema público.

En el segundo modelo, denominado *múltiple* (aplicado en Colombia y en Argentina), hay una única estructura de riesgo en el plano nacional, diferenciada por edad, sexo y área de residencia. En este esquema se puede elegir entre diferentes aseguradoras de salud y adherirse al plan básico que cubre a los participantes y a sus familias. En la modalidad subsidiada de este sistema se está ampliando su cobertura hacia los sectores de los sectores informales y grupos pobres (CEPAL, 2000 a). Finalmente, un tercer modelo es el aplicado en Costa Rica (a partir de 1996) que instituye, a través del Fondo Costarricense de Seguridad Social, una seguridad en salud universal basada en un modelo no competitivo y que sirve prácticamente a toda la población. Su financiamiento proviene de contribuciones tripartitas obligatorias (CEPAL, 2000a).

IV. Recursos provenientes del mercado: actividad económica del adulto mayor

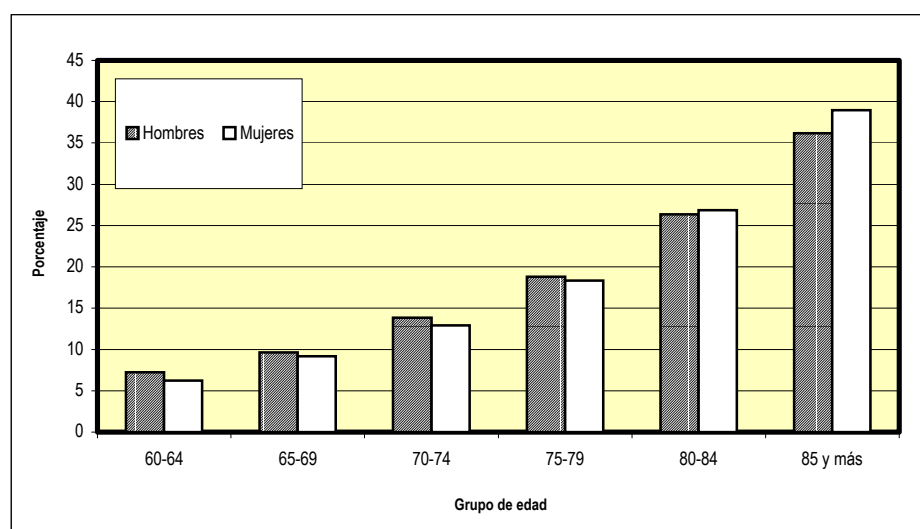
Un tema central de la Estrategia Internacional para la Acción sobre el Envejecimiento y que será discutido en la Cumbre Mundial de Envejecimiento Madrid 2002, es la *participación activa de las personas mayores en la sociedad y en el desarrollo*, lo que incluye el fomento de su capacitación y de su opción para seguir en la actividad productiva durante el tiempo que deseen.

Una alta proporción de los adultos mayores de la región es económicamente activa; así, la proporción de mano de obra adulta mayor supera el 30% en la mayoría de la región, frente al 15% que registra la mayoría de los países europeos. En 1999, los Estados Unidos registraban sólo un 17% de hombres y 9% de mujeres mayores de 65 años que continuaban activos. Por el contrario, el censo mexicano de 2000 mostró que 66.6% de los hombres mayores de 60 años y 42.6% de los mayores de 65 años y más seguían activos, frente a un 71.4% del total de hombres de 12 años y más; sin embargo, estas cifras han disminuido con respecto a las de 1970, cuando 75.8% de los hombres mayores de 60 años eran activos. En las mujeres, la actividad económica disminuye más rápidamente con la edad y sólo 10.3% de mujeres de 65 años o más continúa activa, frente a un 31.3% del total de mujeres de 12 años o más. En Perú (1993), la tasa de actividad de los hombres de 60 años o más llegaba a 59% y la de mujeres apenas a 16%.

En Chile (1998), la tasa de actividad de las personas de 60 años y más es baja: 43% para los hombres y 12% para las mujeres (MIDEPLAN, 1999).

La disminución con la edad de la participación económica del adulto mayor se relaciona principalmente con limitaciones de salud –enfermedades crónicas e incluso discapacidades, como sucede en México (gráfico 4) y es probable que deba agregarse la discriminación laboral hacia los adultos mayores. Como promedio regional, la tasa de participación en actividades económicas de las personas de 60 a 74 años es casi tres veces mayor a la de las de 75 años y más. Esta diferencia puede aumentar en el futuro a causa de la disminución de la tasa de actividad en el grupo de 75 años y más (consecuencia de un aumento de la cobertura de los sistemas de seguridad social) y por un probable aumento de la tasa de participación del grupo de 60 a 74 años. Una mayor participación del grupo 60-64 años podría darse si se alza la edad de jubilación.

Gráfico 4
INCIDENCIA DE LA DISCAPACIDAD EN LA POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS
SEGÚN GRUPOS DE EDADES Y SEXO. MÉXICO, CENSO 2000



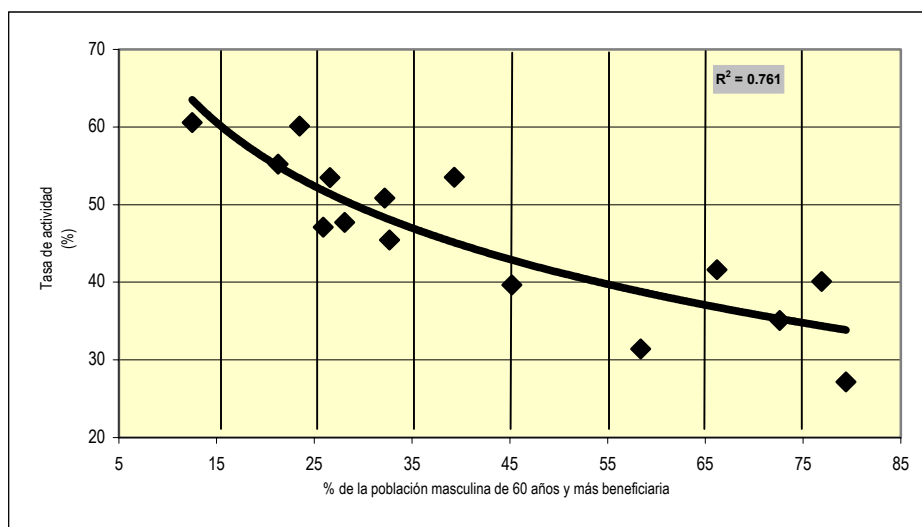
Fuente: Tabulaciones especiales en base a muestra censal.

La alta participación de los adultos mayores en la fuerza laboral no responde necesariamente a una opción voluntaria. Ya se ha visto que en la mayoría de los países más de la mitad de los adultos mayores no recibe jubilación o pensión, y que ello los obliga a continuar en la actividad económica (CEPAL, 2000 b)¹³; esa participación laboral está relacionada con la baja cobertura de seguridad social y con el reducido valor de las pensiones (Villa y Rivadeneira, 2000), y tal situación puede verse en la fuerte asociación entre la tasa de participación económica de las personas de 60 años y más –especialmente la masculina– y la cobertura de los sistemas previsionales (gráfico 5). A medida que baja la cobertura, más altas son las tasas de participación económica. En el caso de las mujeres, esta asociación es más difusa, pues hay otros factores que determinan su participación en el mercado de trabajo. Históricamente, su inserción laboral ha sido baja, más ligada a actividades del sector informal o ellas estuvieron menos tiempo empleadas; por tanto, muchas de las adultas mayores, aunque hayan trabajado, no reciben pensión, y podrían estar recibiendo jubilación por viudez, dependiendo del ingreso del cónyuge o de algún otro familiar.

Gráfico 5

¹³ En algunos casos, incluso los que se retiran formalmente están económicamente activos, quizá porque la pensión media está cerca de la línea de la pobreza (CEPAL, 2000 b)

COBERTURA DE LAS PENSIONES Y JUBILACIONES Y TASA DE PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. POBLACIÓN MASCULINA DE 60 AÑOS Y MÁS EN PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA. ÁREAS URBANAS, 1997



Fuente: CEPAL, 2000 b.

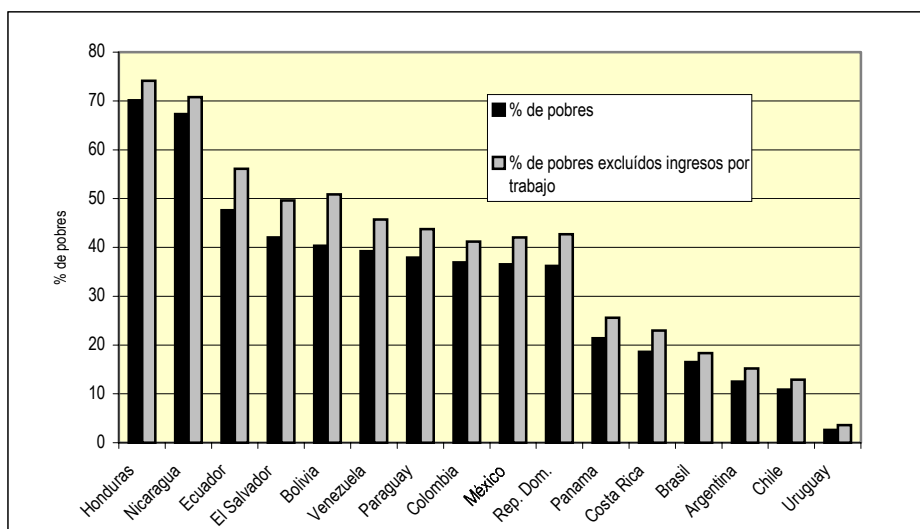
La cobertura de la seguridad social no es el único factor que determina la participación económica de los adultos mayores y, de hecho, en 14 países de la región, entre 60 y 75% de ellos no trabaja ni cuenta con jubilación; ya sea por incapacidad –especialmente los de mayor edad en este grupo– o por que cuentan con apoyo familiar. Algunos otros determinantes de su participación económica, como la disponibilidad de otras transferencias y apoyos familiares, no han sido estudiados suficientemente en la región. Un estudio reciente hecho en Indonesia muestra que "las transferencias financieras que hacen los hijos a los padres adultos mayores no parecen ser determinantes en la participación económica de los padres en el mercado de trabajo" (Cameron y Cobb-Clark, 2001).

Ante esta ausencia de jubilaciones y pensiones, un rasgo característico de la inserción laboral del adulto mayor es su precaria condición y así lo demuestran las cifras por categoría ocupacional, horas trabajadas e ingresos percibidos; se trata de actividades por cuenta propia –excluidos técnicos y profesionales–, generalmente sin previsión social y que predominan entre los adultos mayores –especialmente mujeres– (del Popolo, 2000). Si se hace un análisis según las horas trabajadas por quienes permanecen en el mercado laboral, puede afirmarse que estos son ocupados plenos, pues trabajan en promedio 39 horas semanales. Si bien no hay diferencias significativas entre las horas que trabajan los adultos mayores y las personas cercanas a jubilarse, el ingreso de los primeros es notoriamente inferior al percibido por el grupo de 50 a 59 años y en la mayoría de los países está bajo la línea de pobreza o de valores equivalentes a la misma (Del Popolo, 2000).

Ahora bien, es incorrecto creer que el ingreso proveniente del trabajo de los adultos mayores siempre es bajo. En Chile, por ejemplo, 32% de los hombres y 36% de las mujeres mayores económicamente activos perciben ganancias que los ubican en el quintil más alto de ingresos. 12% de hombres y 8% de mujeres son propietarios o patrones de negocios, frente a casi 4% de la población de 15-59 años. Sin embargo, un estudio de CEPAL (CEPAL, 2000 b) muestra que Chile es el único país en la región (entre 16 países) donde el ingreso proveniente del trabajo de los adultos mayores urbanos está cerca o equivale a dos líneas de pobreza; en otros países alcanzan apenas una línea de pobreza. A pesar de lo anterior, el trabajo de los adultos mayores tiene un impacto significativo en la situación de pobreza en sus hogares, y así se aprecia en el gráfico 6 (véase también el cuadro A-3 del anexo). En Bolivia, el porcentaje de pobres en hogares urbanos con

adultos mayores subiría de 40% a 51% si se eliminan los ingresos por trabajo; en otros países las diferencias entre la pobreza efectiva y la simulada con este criterio serían superiores a 7 puntos porcentuales en Ecuador, El Salvador, República Dominicana y Venezuela. En términos relativos, las cifras anteriores muestran mayores impactos y en al menos 9 países de la región la incidencia de la pobreza en hogares con adultos mayores aumentaría en cerca o más de 20% si se eliminan los ingresos por trabajo. Estos resultados dejan en claro que la participación de los adultos mayores en la actividad económica representa una posibilidad cierta de salir de la pobreza.

Gráfico 6
INCIDENCIA DE LOS INGRESOS POR TRABAJO EN LA POBREZA DE LOS
HOGARES CON ADULTOS MAYORES. ÁREA URBANA, 1997



Fuente: Cuadro A-3, Anexo.

V. La familia como estructura de apoyo a los adultos mayores

Además de los ingresos recibidos por remuneración a su trabajo, pensión, jubilación u otra fuente, la mayor parte de los recursos que reciben los adultos mayores proviene en muchos casos de transferencias familiares, tanto intrahogar como extrahogar. Esas transferencias asumen diversas formas, que van desde la ayuda monetaria directa hasta el cuidado personal de un pariente enfermo o parcialmente discapacitado, o mediante apoyo emocional (visitas, llamadas, etc.).

Una forma habitual de solidaridad intergeneracional es la cohabitación, que reduce el gasto de vivienda por persona, resulta en economía de escala en la compra y preparación de alimentos y facilita el apoyo directo a parientes con necesidades especiales; ahora bien, la coresidencia no siempre implica una socialización de los recursos y los adultos mayores pueden recibir transferencias de familiares que residen fuera del hogar. En el caso de México, Montes de Oca (2001) muestra que el 38.6% de los mayores de 60 años recibe algún apoyo de personas ajenas al hogar, mientras el 28.5% de los residentes en hogares conyugales ampliados no recibe apoyo de sus coresidentes. Aun así, autores como De Vos y Holden (1988) consideran que el hecho de compartir un espacio físico está muy relacionado con compartir otros recursos. Como se aprecia en el gráfico 1, la mayoría de los países registra una proporción significativa de la población de 60 años y más que no recibe ingresos ni de pensiones ni de trabajo.

Como estas son las fuentes principales de ingreso de los adultos mayores, es altamente probable que deban contar con apoyo familiar para sobrevivir. Wong (1999), con datos de la Encuesta Nacional de Empleo de México, 1996, establece que la población no económicamente activa cuenta efectivamente con el apoyo familiar, que es la fuente más importante de apoyo, especialmente en el caso de los adultos mayores. De hecho, la probabilidad de recibir apoyo familiar es inversa a la de recibir una pensión y tiende a aumentar en personas mayores.

V.1 Determinantes de la coresidencia de los adultos mayores

Si la coresidencia es una vía por la que operan las transferencias familiares hacia y desde los adultos mayores, es importante determinar los factores asociados, para cuyo fin se efectuaron regresiones logísticas para los países que hicieron Encuestas Demográficas y de Salud (DHS) (que desafortunadamente no incluyen el estado conyugal). La variable independiente elegida es la proporción de personas de 60 años y más que viven solas o sólo con su pareja, y las variables independientes son el sexo, la edad, el área de residencia, la condición de trabajo y la ubicación del hogar según quintil de pobreza. De los resultados de este análisis (véase el cuadro 4) no pueden derivarse conclusiones generalizables; sin embargo, es posible detectar algunos rasgos comunes; así, en todos los países la educación se relaciona positivamente con el hecho de vivir solo o con la pareja y sus efectos son significativos. Este mismo resultado fue encontrado en un estudio más amplio realizado con encuestas de hogares de varios países latinoamericanos, que incluyen datos precisos para medir la pobreza y la condición de empleo (Shinkai, 2000).

La misma tendencia se observa en el caso de la condición laboral. En tres de los cuatro países que disponen de este dato, el hecho de trabajar aumenta la probabilidad de vivir solo o con la pareja, si bien la causalidad no es tan clara. Excluidos Nicaragua, República Dominicana y Colombia, en los demás países la probabilidad de vivir solo o con su pareja aumenta con la edad; el área de residencia muestra coeficientes significativos en tres países, pero que apuntan en sentidos distintos. Mientras en Bolivia y Perú la tendencia a vivir sólo o con pareja es mayor en las áreas rurales, en Nicaragua sucede lo contrario.

Cuadro 4
REGRESIÓN LOGÍSTICA DE LA PROPORCIÓN DE PERSONAS
QUE VIVEN SOLASO SÓLO CON SU PAREJA

Variable	Colombia 1995	Nicaragua a 1998	Bolivia 1998	Brasil 1996	Guatemala a 1995	Perú 1996	República Dominicana a 1996
Edad	- 0.0046	0.0060	0.0182**	0.0146**	0.0126*	0.0189**	0.0096
Sexo masculino	0.1843	0.1137**	0.0622	0.0953	0.2699**	- 0.1126	0.2139*
Años de escolaridad	0.0717**	0.0170**	0.0155	0.0518**	0.0633**	0.0259**	0.0561**
Residencia urbana	0.0838	0.1259**	-	0.1698	0.1617	- 0.5616**	- 0.0794
Trabaja	0.1272	0.1155**	0.6349**	nd	nd	0.4519**	nd
Pobres: 20% más pobre	0.6383**	0.1827**	0.2682**	0.0573	- 0.3007*	0.0936	0.9113**
Ricos: 20% más rico	- 0.6034**	0.1522**	0.2026*	- 0.3504**	- 0.6882**	- 0.7759**	- 0.0874
Casos	3143	3810	-	4454	3812	9849	3058
			0.4965**				
			4124				

Fuente: Bases de datos de las Encuestas Demográficas y de Salud.
Nd: no hay datos. * Significativo al 5%. ** Significativo al 1%.

En el caso de las variables de pobreza, es dable esperar una menor tendencia a la coresidencia entre los adultos mayores con mayores recursos, que desearían una vida independiente y cuentan con mejores condiciones materiales para lograrla. Este resultado ha sido ampliamente reconocido en el caso de los países desarrollados (Hareven, 1994, 1996). Sin embargo, la relación es menos clara en América Latina; en general, los resultados de la regresión son opuestos a lo esperado, pues muestran que, al controlar las demás variables, los adultos mayores ricos (quintil superior) muestran una menor probabilidad de vivir solos que los que se ubican en los quintiles intermedios. Adicionalmente, los pobres son más propensos a vivir solos. En Nicaragua, ricos y pobres muestran una alta propensión a vivir solos o con su pareja en comparación con los ubicados en los quintiles intermedios.

En su estudio comparativo de los beneficios de la seguridad social, Shinjai (2000) encuentra que las diferencias son similares entre los países. En Uruguay, Chile, Argentina y Brasil el mayor ingreso se asocia a una tendencia a vivir solo o con la pareja y en las áreas rurales de México y en Colombia se observa lo opuesto. Saad (1998) encuentra la misma relación entre pobreza y coresidencia en Brasil; en el Nordeste un mayor ingreso tiende a incrementar los niveles de coresidencia y en el Sudeste ocurre lo contrario. En Chile, del 6.9% de los adultos mayores que viven en hogares unipersonales, un 31% pertenece al quintil más alto y sólo un 19% a los dos quintiles más pobres, sugiriendo una mayor tendencia a vivir sólo a medida que aumenta el ingreso (MIDEPLAN, 1999). Un 51% de los que residen en hogares de 5 miembros o más, pertenece a los dos quintiles más pobres.

Una posible explicación a este resultado está en la definición de la variable pobreza; como se define a nivel del hogar, es posible que los hogares de hijos u otros familiares más ricos estén en mejores condiciones de albergar a un adulto mayor. Esta tendencia a la mayor coresidencia de los adultos mayores con más recursos implica que, en un contexto familiar de escasos recursos, un mayor ingreso del adulto mayor puede aumentar la dependencia de hijos y otros familiares en relación con él o ella. Este es el postulado de Ruggles (1987; 1996; 2000) para el caso de los Estados Unidos en el siglo XIX. El razonamiento es que en una economía rural, donde la independencia de los hijos pasa por su acceso a la tierra, los padres que disponen de algún recurso económico, principalmente tierra u otro medio de producción, acababan siendo responsables por el sustento de sus hijos, aun cuando éstos ya fuesen mayores y económicamente activos.

Una tesis adicional es la señalada por Shinkai (2000), quien postula que la privacidad podría ser un 'bien inferior' hasta que no se alcancen determinados umbrales en el nivel de ingreso. El apoyo familiar también se relaciona con el número de hijos y en el caso de los beneficios de salud esta variable puede influir en la posibilidad de tener apoyo institucional. Por ejemplo, en México, Montes de Oca (2000), usando datos de la Encuesta Sociodemográfica de los Adultos Mayores de 1994, encontró que el tener hijos incrementa la probabilidad de recibir apoyo institucional en salud, pues aquellos trabajadores que tienen seguro de salud pueden incluir a sus familiares dependientes: entonces, los adultos mayores sin hijos no tienen probabilidad alguna de acceder a estos servicios.

En todo caso, está muy claro que, en la mayoría de los países, los adultos mayores son contribuyentes netos al ingreso de su hogar. Según la CEPAL (2000), aproximadamente un tercio de aquellos hogares urbanos en que los adultos mayores viven con personas de otras edades (diferentes a sus cónyuges), dependen en más de la mitad del ingreso provisto de los primeros. Esta proporción varía de 17% en Venezuela y 19% en México a 39% en Chile y 46% en Bolivia. Las cifras son aún mayores en las áreas rurales y varían entre 28% en Panamá y 68% en Argentina. En la misma forma, Souza (1998) nota que la extensión de los beneficios de la seguridad social en Brasil ha beneficiado no sólo a los adultos mayores, sino también ha contribuido a mejorar la situación de sus familias de residencia.

Los párrafos previos han enfatizado la importancia de los factores económicos en la determinación de los patrones de coresidencia de los adultos mayores con otros miembros del

hogar. Aunque el patrón de familias complejas descritas por varios autores (CEPAL, 2000 b; De Vos, 1995) obedece, al menos en parte a la necesidad económica tanto de los adultos mayores como de sus familias, también es posible que la alta proporción de cohabitación entre las generaciones en la región sea el resultado de preferencias que tienen sus raíces en patrones culturales (De Vos, 1998). En los Estados Unidos, algunos autores (Angel y Tienda, 1982; Burr y Mutchler, 1992; De Vos, 1998; Mutchler, 1990) enfatizan que, aun controlando dichos factores económicos, la tendencia a la formación de hogares complejos varía entre grupos étnicos. Por otro lado, Chattopadhyay y Marsh (1999) encuentran, en el caso de Taiwán, que los valores culturales también muestran transformaciones como consecuencia de cambios en el contexto económico y demográfico. La solidaridad entre generaciones continúa siendo un valor cultural importante en dicho países. Sin embargo, la coresidencia de los adultos mayores con sus hijos decreció entre 1963 y 1991, en tanto que el apoyo monetario se incrementó hacia los adultos mayores no coresidentes. Algunos estudios etnográficos de la situación de los adultos mayores en áreas rurales de América Latina muestran un panorama inconsistente en el que se observa integración en algunos lugares (Sokolovsky, 2000) y desintegración en otros (Kagan, 1980).

Aunque en América Latina los lazos familiares son aún fuertes, existen dudas en cuanto a que la institución familiar tendrá la capacidad de absorber una mayor cantidad de adultos mayores que en el pasado. El debilitamiento de la estructura familiar se asocia a una serie de procesos objetivos; tal como ha sido señalado por Cowgill (1974), la mayor parte de los factores asociados al desarrollo (industrialización, urbanización, más avanzada tecnología médica, mejor educación) tenderían a aislar y separar al adulto mayor de sus familias, reduciendo su estatus social frente a los jóvenes. Mason (1992) también enfatiza en que muchos factores asociados a la modernización conspiran contra los patrones tradicionales de coresidencia en los países asiáticos.

Esto no es precisamente lo que los datos analizados muestran; en efecto, no existe una tendencia definida hacia la disminución de la coresidencia de adultos mayores. En realidad, las evidencias respecto a un posible descenso en los patrones de coresidencia con los adultos mayores son contradictorias (véase el cuadro A-4). En algunos países, como Brasil, se observa un incremento mientras en otros, tales como Colombia y México, se muestra una tendencia a la estabilidad en este indicador a lo largo de las tres últimas décadas. Solís (1998) muestra que en México estos patrones no han experimentado cambios aparentes en las tres últimas décadas, a pesar de las grandes transformaciones que ha vivido el país y ello pone en jaque el potencial explicativo de la teoría de la modernización para el estudio de los arreglos familiares de los adultos mayores. Es posible que esta aparente paradoja se explique en que este proceso se produce en la región en un contexto sin el desarrollo institucional que se dio en los países desarrollados en el inicio del proceso de envejecimiento.

Frente a la insuficiencia de los sistemas macrosociales de solidaridad intergeneracional, además de que la familia se cuenta como un tipo de colchón de choque, la legislación sobre la materia refleja algunas deficiencias. Por una parte, las constituciones y la legislación de muchos países de la región enfatizan en el papel protagónico de la familia en los cuidados con la población adulta mayor pero, como sucede en Brasil (Goldani, 1989), el paso a las familias de las responsabilidades de cuidado del adulto mayor está basado en valores tradicionales sobre los roles de género. En segundo lugar, existe un sesgo ideológico, ya que considera los patrones de coresidencia de los adultos mayores como la solución humanamente más deseable. Cabe preguntar si la coresidencia con los hijos adultos es necesariamente el arreglo que mejor atiende a las necesidades de ambas generaciones. En este contexto, algunos historiadores han desmitificado la noción de una convivencia idílica entre las generaciones en Europa occidental antes de la Revolución Industrial; supuestamente esa convivencia fue deshecha por los procesos de modernización; se ha subrayado que el trato hacia los viejos era rudo, pragmático y cargado de suspicacias y sospechas de ambos lados (Plakans, citado en Sokolovsky, 2000).

V.2 Redes de apoyo social y comunitario

En este documento no se ha mencionado hasta el momento el apoyo que reciben los mayores y que proviene de redes de apoyo social –especialmente comunitarias– que pueden ser el mecanismo más efectivo para suplir la falta de seguridad económica. Sin embargo, en contextos extremos con fuertes restricciones económicas y limitado o nulo apoyo institucional estatal, mermaría la capacidad de que operen estas redes o que al menos se activen oportunamente; por lo tanto, los mayores, especialmente los ancianos y ancianas, entran a un aislamiento social que provoca el deterioro del tejido social y procesos de desafiliación social (Enríquez Rosas, 2000).

El desarrollo reciente de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general en el plano comunitario ofrece un marco nuevo para crear de mecanismos de protección social, apoyo y mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor; no obstante, debe quedar claro que la cobertura actual de estas organizaciones es limitada.

VI. Discusión

Del análisis anterior se desprende que los tres componentes analizados en este trabajo (seguridad social, participación económica y arreglos familiares) seguirán teniendo, en la mayoría de los países de la región, un impacto significativo en la calidad de vida de los adultos mayores y de las familias en que ellos se insertan.

En cuanto a la seguridad social, los actuales niveles de cobertura de estos sistemas señalan que los países de la región deberán hacer esfuerzos sistemáticos para ampliar esa cobertura y así permitir que una proporción creciente de las personas mayores de 60 o 65 años pueda acceder a los beneficios de una pensión de vejez. Estas mejoras tendrían un efecto positivo en los adultos mayores y también en sus familiares; por una parte, se alivia la carga familiar que implica la dependencia económica de los adultos mayores, pero además se amplía la posibilidad de que estos adultos mayores apoyen a sus descendientes (corresidentes y no corresidentes). Es sabido que los adultos mayores son transferidores netos de recursos materiales en todas las sociedades (*Commission on Behavioral Sciences and Education, 2001*), aunque el flujo de recursos instrumentales (cuidados, apoyo emocional, etc.) vaya en sentido inverso (Kolhi, 1999). En efecto, en países con una amplia cobertura de la seguridad social, el flujo neto de recursos va desde los más viejos hacia los jóvenes, mediante la transferencia de una parte de los ingresos por jubilaciones, lo que tiene el beneficio adicional de asegurar la cohesión entre generaciones (Kohli, 1999).

Lo anterior legitima más la inquietud de que las reformas no aumenten sustancialmente la tasa de incorporación a los beneficios de la jubilación bajo los sistemas formales, con lo que la calidad de vida de las personas de edad se deterioraría. Las cohortes de ancianos que se incorporarán en los próximos años contendrían una proporción significativa de personas con baja o ninguna educación o con una historia laboral más bien informal y con escasa acumulación de riquezas, quedando fuera de los sistemas de seguridad social implementados recientemente (Palloni, 2000).

La pregunta central es, entonces, en qué medida los países están en condiciones –tanto desde el punto de vista político e institucional como del económico– de enfrentar este reto. Esta pregunta ya se la han hecho varios investigadores del tema y la respuesta no parece tan sencilla. Por una parte, se ha considerado (Bravo, 2000) que, en el contexto latinoamericano –en que sólo una parte de la población es asalariada y contribuye con la seguridad social–, llevar la cobertura al 100% de la población en el marco del sistema de reparto puede resultar, desde el punto de vista fiscal, una carga excesivamente onerosa, a menos que cambien las demás variables y parámetros del sistema (por ejemplo, vía aumento de la edad de jubilación, y del monto de la contribución, ampliación del número de contribuyentes, etc.), en cuyo caso el Estado debiera hacerse cargo de pensiones no contributivas, hasta que jubilen las cohortes que estuvieron contribuyendo durante un tiempo razonable.

Desde el punto de vista de las reformas y de la implementación de esquemas de capitalización individual, es preciso considerar que un aumento de la cobertura requiere también aumentar la participación en el sistema de todos los trabajadores, sean del sector formal e informal, lo cual no parece ser tan sencillo ni viable. Se ha destacado (Bravo, 2000) que estos sistemas, desde el punto de vista fiscal, implican altos costos al Estado, debido a la necesidad de que éste se haga cargo de las pensiones ya comprometidas bajo el sistema de reparto y que también se haga cargo de las contribuciones de aquellos trabajadores activos que se traspasan al nuevo sistema. Este proceso de ‘hacer explícita la deuda implícita’ del sistema de reparto, significa en algunos países un porcentaje del PIB bastante elevado, especialmente en los países de mayor envejecimiento demográfico (más del 20% del PIB en países con estructuras más ‘jóvenes’ y más de 200% del PIB en Argentina, Uruguay y Brasil). Este autor muestra que el escenario se presenta como más manejable cuando se estima el costo final anual de la transición. Este costo, distribuido durante un período de 40 años, es menos del 1.5% del PIB en países con deuda baja o muy baja (los de menor envejecimiento demográfico), de 1.4% a 6.7% en países intermedios y de 6% a 13% en Brasil, Argentina y Uruguay (Bravo, 2000). Algunos autores consideran factible la cobertura universal del sistema de pensiones en los países donde el ingreso generado por los sistemas previsionales es reducido. Por ejemplo, se estima que el costo de las pensiones básicas de Costa Rica en 1999, que cubren al 25% de la población de 65 años y más (cerca de 30 a 39 dólares por mes) era igual a apenas el 0,1% del PGB. Con una cobertura completa, el costo fiscal ascendería aproximadamente sólo al 0,5% del PGB (Willmore, 2001).

En cuanto a la participación en la actividad económica del adulto mayor, además de ampliar la cobertura y mejorar los ingresos provenientes de jubilaciones y pensiones, debe transformarse el mercado de trabajo para que los adultos mayores cercanos a su edad de jubilación pasen por una transición gradual del trabajo a jornada completa hacia jornadas parciales, sin que impacte negativamente en el ingreso percibido y, por sobre todo, que no pasen violentamente de una actividad laboral plena a una inactividad completa. Lo que exige una flexibilización del mercado laboral inexistente en la actualidad. Dada la importancia creciente asignada a la participación activa en la sociedad de los adultos mayores, la vida laboral después de los 60 años ya no se percibe como un valor negativo, siempre que ésta se produzca no por una necesidad imperiosa de ingresos sino por la existencia de un deseo de estar activo en un trabajo para el cual los adultos mayores se sientan capacitados, puedan generar ingresos y con ello contribuir al bienestar personal, familiar y nacional. El tercer componente se relaciona con las transferencias intrafamiliares, especialmente

aquellas que van dirigidas a los adultos mayores. Ante la insuficiencia de apoyo de los sistemas macrosociales hacia los adultos mayores, es probable que la familia continúe siendo uno de los principales soportes del adulto mayor, incluso a medida que esta población vaya aumentando rápidamente durante las próximas décadas. En un contexto institucional, económico y social como el descrito, en el que el Estado traspasa al sector privado responsabilidades que antes eran consideradas de bien social, la coresidencia de los adultos mayores con otros familiares podría convertirse en una de sus pocas alternativas para asegurar una cierta calidad de vida.

Palloni (2000b) argumenta que la combinación de una población creciente de adultos mayores, con las restricciones fiscales y el desarrollo limitado de los mecanismos de transferencias sociales, la situación de los adultos mayores corra el riesgo de deteriorarse, lo que se agravaría si se incrementa la prevalencia de discapacidades y enfermedades crónicas entre los mayores de edad, lo que pesaría considerablemente sobre la capacidad de las familias para proporcionarles apoyo. Una permanencia más larga de adultos mayores en las familias puede implicar una enorme carga para parejas jóvenes, siendo que ellas mismas no siempre tienen la capacidad económica para sostener a sus descendientes. Esta situación no es tan comparable con la experiencia histórica de los países industrializados. No sólo el número de adultos mayores que dependían de la ayuda familiar en esas épocas es más pequeño a las actuales proporciones a las que se enfrenta la región latinoamericana, sino que la estructura social prevaleciente favoreció soluciones dentro del contexto familiar, como las familias eran más grandes y más estables, la migración era más baja, y el rol social de las mujeres se limitaba más al ámbito doméstico.

En esta misma línea se ubica la importancia de los cambios en los enfoques nacionales para tratar el tema del envejecimiento. De hecho, existe una tendencia en los países, y que debiera incrementarse a partir de la Cumbre Mundial de Envejecimiento del 2002, a introducir cambios constitucionales (como el caso de Brasil), legales o programáticos para favorecer una mayor cobertura de servicios que apunten a mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Esas acciones subrayan la importancia del aporte de la familia como apoyo a los adultos mayores, entre otras razones por los elevados costos, especialmente de salud, que impone su cuidado cuando son dependientes. Sin embargo, preocupa la carga de este enfoque para los diferentes miembros de la familia y especialmente para las mujeres, como señala Goldani (1989) para el caso de Brasil.

Hay otros fenómenos demográficos que son simultáneos a la segunda transición demográfica y que implican cambios notables en los patrones de nupcialidad y en las estructuras de parentesco derivadas de una menor fecundidad. Wong (1999) se pregunta si con las nuevas generaciones, al tener un número menor de hijos, habrá en el futuro una menor propensión a recibir apoyo familiar entre las generaciones de edad avanzada de parte de sus descendientes. La situación actual sería más compleja para los 'donantes actuales', que deben apoyar a sus ancianos y prepararse para su propia vejez. Deben considerarse los cambios demográficos para planificar acciones futuras, no sólo por sus efectos agregados sino también por las transformaciones de las estructuras familiares que resultarán de los procesos demográficos: aumento de la mortalidad, y su efecto en el aumento del promedio de vida y la disminución de la viudez; disminución de la fecundidad, con una verticalización de las estructuras familiares y un aumento de la carga que significa cuidar a los ancianos en un hijo (o máximo en dos), y finalmente, cambios en los patrones de formación de uniones, visibles en un aumento notable en las nuevas generaciones de las separaciones y divorcios. Las tendencias demográficas que llevan a un mayor envejecimiento poblacional y sus contextos requieren acción concertada a mediano y largo plazo y que deben emprenderse a la brevedad, aprovechando la ventana de oportunidades que brinda la misma dinámica demográfica en gran parte de la región que caracterizan el momento actual, con una proporción de adultos mayores no muy elevada y una disminución de la de niños y adolescentes.

Bibliografía

- Angel, Ronald y M. Tienda. (1982). “Determinants of extended family structure: cultural pattern or economic need?” *American Journal of Sociology* 87 (6): 1360-1383.
- Arenas de Mesa. (1999). El sistema de pensiones en Chile: resultados y desafíos pendientes. Documento presentado en el Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre las Personas de la Tercera Edad. Seminario Técnico. Santiago de Chile, septiembre 8-10.
- Benítez Zenteno, R. (2000). “El proceso de envejecimiento de la población de América Latina y el Caribe: Una expresión de la transición demográfica” en CEPAL. *Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre las personas de la tercera edad*. CELADE- División de Población CEPAL. Santiago de Chile: 25-58.
- Bravo, Jorge. (2000). Envejecimiento de la población y sistemas de pensiones en América Latina. *Revista de la CEPAL*, Santiago, Chile.
- Burr, J. A. y J. E. Mutchler. (1992). “The living arrangements of unmarried elderly Hispanic females”. *Demography* 29.
- Cameron, Lisa y Cobb-Clark, D. (2001), Old-age support in developing countries: Labour supply, intergenerational transfers and living arrangements. Institute for the Study of Labour, Germany. Discussion Paper No 289.
- CELADE. (1999). América Latina: proyecciones de población urbana y rural 1970-2025. *Boletín Demográfico* 63.
- CEPAL. (2000a), *Equidad, Desarrollo y Ciudadanía*. Vigésimo octavo Período de Sesiones, México DF.
- _____(2000b), *Panorama social de América Latina 1999-2000*. Santiago, Chile.
- Chan, Angelique y Julie DaVanzo. (1996). “Ethnic differences in parents’ coresidence with adult children in Peninsular Malaysia”. *Journal of Cross-cultural Gerontology* 11 (1): 29-59.

- Chattopadhyay, Arpita y Robert Marsh. (1999). "Changing living arrangements and familial support for the elderly in Taiwan: 1963-1991". *Journal of Comparative Family Studies*, Summer.
- Commission on Behavioral and Social Sciences and Education (2001). Preparing for an Aging World: The case for Cross-National Research. National Academy Press (www.nap.edu/books).
- Cox, Edwards, A. (2001). Social Security Reform and Women's Pensions. Policy Research Report on Gender and development, Working Paper series No. 17, The World Bank.
- Cowgill, Donald O. (1974). "Aging and modernization: a revision of theory", J. F. Gubrium (ed.). *Late life: communities and environmental policy*. Springfield, Charles C. Thomas.
- del Popolo, Fabiana (2000). Características socioeconómicas y sociodemográficas de las personas de edad de América Latina. CELADE, ECLAC. Santiago, Chile (en edición).
- de Vos, Susan. (1995). *Household composition in Latin America*. New York, Plenum Press.
- ____ (1998). "Regional differences in living arrangements among the elderly in Ecuador". *Journal of Cross-Cultural Gerontology* 13 (1): 1-20.
- ____ y K. Holden. (1988). "Measures comparing living arrangements of the elderly: an assessment". *Population and Development Review* 14 (4): 688-704.
- Enríquez Rosas, Rocío (2000). Redes sociales y envejecimiento en contextos de pobreza urbana. Documento Presentado a la Reunión de Sociedad Mexicana de Demografía, Ciudad de México, 2000.
- Gibson, D. (1996), Broken down by age and gender. The problem of old women redefined. *Gender and Society* 10 (4).
- Goldani, Ana Maria. (1989). The families in later years in Brazil: burdens of family caregiving to the elderly and the role of public policy. Trabajo presentado en el International Seminar on Morbidity, Mortality and Social Policy, UFMG/Ministry of Health/UNFPA/ABEP, Belo Horizonte, 12-15 de diciembre.
- Hakkert, Ralph y Guzmán, J. M. (2001). Envejecimiento demográfico y arreglos familiares de vida en América Latina. UNFPA Country Support Team, México (mimeo).
- Guzmán, José Miguel y Hakkert, Ralph (2001). Some social and economic impacts of the ageing process in Latin American countries. Documento presentado en la XXIV IUSSP General Population Conference, Salvador, Brasil 18-24, Agosto 2001.
- Hareven, Tamara (1994), "Aging and generational relations: historical and life course perspective on intergenerational supports for the old in the United States". *Annual Review of Sociology* 20: 442.
- ____ (1996). "Introduction: aging and generational relations over the life course". In: Tamara K. Hareven (ed.). *Aging and generational relations over the life course*. Berlin, De Gruyter: 1-12.
- Klein, E. y V. Tokman (2000), Estratificación social bajo tensión en la era de la globalización". *Revista de la CEPAL* 72: 7-30.
- Kagan, D. (1980). Activity and aging in a Colombian peasant village, C. Fry (ed.), *Aging in culture and society*. New York, Bergin.
- Kolhi, M. (1999). Private and Public transfers between generations: Linkin the family and the State. Institute for Sociology and Research Group on Aging and the Life Course, Free University of Berlin (borrador).
- Mason, Karen Oppenheim. (1992). "Family change and support of the elderly in Asia: what do we know?" *Asia-Pacific Population Journal* 7 (3): 13-32.
- McNicol, Geoffrey. (1997). *Population and poverty: a review and restatement*. New York, Population Council, Working Paper 105.
- Mesa-Lago, Carmelo. (2000). *Desarrollo social, reforma del Estado y de la seguridad social en el umbral del siglo XXI*. Santiago de Chile, CEPAL, División Desarrollo Social. Serie Políticas Sociales 36.
- MIDEPLAN. (1999). *Situación de los adultos mayores en Chile*. Santiago de Chile, MIDEPLAN, Resultados de la VII Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 1998), Documento 10.
- Montes de Oca, Verónica. (1997). La actividad de las mujeres en edad avanzada en México: entre la sobrevivencia y la reproducción cotidiana. Trabajo presentado en la Reunión de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Guadalajara, 17-19 de abril.
- ____ (2000). Factores que condicionan el apoyo institucional entre la población con 60 años y más en México. Documento presentado a la VI Reunión Nacional de la Investigación Demográfica, Sociedad Mexicana de Demografía, El Colegio De México, Julio 31-agosto 4, 2000.
- ____ (2001) Estructura y funcionamiento de los apoyos sociales entre la población con 60 años y más en México. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México, D.F (mimeo)
- Morley, Samuel. (2000). *La distribución del ingreso en América Latina y el Caribe*. Santiago, CEPAL/FCE.

- Mutchler, Ian B. (1990). "Household composition among the nonmarried elderly: a comparison of black and white women". *Research on Aging* 12 (4): 487-506.
- Nitsch, Manfred y Helmut Schwarzer. (1998). "De paradigmas a mitos: notas sobre os fundos de pensão chilenos". *Revista de Economia Política* 18 (2): 96-105.
- Palloni, Alberto. (2000). Programmatic and policy aspects of population ageing and living arrangements. Document presentado en la United Nations Technical Meeting on Population Ageing and Living Arrangements of Older Persons: Critical Issues and Policy Responses, UN Population Division.
- Recchini de Lattes, Zulma. (2000). "Tendencias y perspectivas del envejecimiento de la población femenina y masculina en Argentina". CEPAL. *Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre las Personas de la Tercera Edad*. Santiago de Chile, CELADE-División de Población CEPAL: 25-58
- Rodríguez, Jorge. (2000). Vulnerabilidad demográfica y desventajas sociales. Santiago de Chile, CELADE, mimeo.
- Ruggles, Steven. (1987). *Prolonged connections: the rise of the extended family in nineteenth century England and America*. Madison, University of Wisconsin Press.
- Ruggles, Steven. (1996). "Living arrangements of the elderly in America, 1880-1980". Tamara K. Hareven (ed.). *Ageing and generational relations over the life course*. Berlin, De Gruyter: 254-271.
- _____. (2000), "Living arrangements and well-being of older persons in the past". In: UN Population Division. *United Nations Technical Meeting on Population Ageing and Living Arrangements of Older Persons: Critical Issues and Policy Responses*. New York, UN Population Division ESA/P/WP.157: 3-1:3-84.
- Saad, Paulo M. (2000). "Impact of pension reform on living arrangements of older persons in Latin America". UN Population Division. *United Nations Technical Meeting on Population Ageing and Living Arrangements of Older Persons: Critical Issues and Policy Responses*. ESA/P/WP.157: 5-1:5-45.
- Shinkai, Naoko. (2000). *How do social security and income affect the living arrangements of the elderly? Evidence from reforms in Mexico and Uruguay*. Washington DC, IDB Working Paper 432.
- Solis, Patricio. (1999). Living arrangements of the elderly in Mexico. Documento presentado en la Annual Meeting of the PAA, New York, April.
- Souza, Marcelo M. (1998). "A importância dos rendimentos dos idosos nos rendimentos das famílias". *Como Vai? População Brasileira* 3 (3).
- Sokolovsky, Jay (2000), "Living arrangements of older persons and family support in less developed countries". *Technical Meeting on Population Ageing and Living Arrangements of Older Persons: Critical Issues and Policy Responses*. New York, UN Population Division ESA/P/WP.157: 4-1:4-36.
- United Nations. (1999). *World Population Prospects, 1998 Revision*. UN Population Division, NY.
- Uthoff, A. y Ruedi, N. (2001). Diferencias en la efectividad de la política social para atenuar la incidencia de la pobreza: Un análisis de las encuestas de hogares. (borrador). CEPAL, Santiago, agosto, 2001.
- Villa, M. y Rivadeneira, L. (2000). "El proceso de envejecimiento de la población de América Latina y el Caribe: Una expresión de la transición demográfica". CEPAL. *Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre las Personas de la Tercera Edad*. Santiago de Chile, CELADE-División de Población CEPAL: 25-58.
- Willmore, Larry (2001). 'Universal Pensions in Low-Income Countries'. Document prepared for presentation to the annual meeting of the Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones San José, Costa Rica, 19-23 noviembre 2001.
- Wong, Rebeca (1999) 'Transferencias intrafamiliares e intergeracionales en México' en Envejecimiento Demográfico de México: Retos y Perspectivas. Consejo Nacional de Población, México.

